

13 de noviembre de 2021

CONTRA LA BANALIZACIÓN DE LA DICTADURA CHILENA

En el marco de la actual campaña presidencial se ha desarrollado una saludable discusión sobre las garantías democráticas y el respeto a los Derechos Humanos en diversos países de nuestro continente y en algunos territorios de nuestro país. Sin embargo, resulta totalmente inconsistente con esa saludable discusión la minimización, relativización y banalización de las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile desde 1973 en adelante, como también con el término del régimen democrático en el país desde el 11 de Septiembre de ese año.

Aunque parezca increíble, se hace necesario recordar que después del Golpe de Estado se cerró el Congreso Nacional, se proscibieron todos los partidos políticos, se quemaron los registros electorales y se aprisionó a diversas autoridades democráticamente electas que ejercían legal y legítimamente sus cargos. Se suspendieron las garantías fundamentales y la Constitución Política misma fue suspendida y reemplazada progresivamente por Actas Constitucionales emitidas con la sola autoridad de la fuerza.

En pleno siglo XXI se vuelve a hacer necesario recordar que las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde Septiembre de 1973 no tienen parangón en toda nuestra historia patria, con víctimas comprobadas de miles de ejecuciones políticas, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y atrocidades de la máxima gravedad. Mil doscientos lugares de detención y tortura repartidos por todo el territorio nacional atestiguan que la intensidad del Terrorismo de Estado desarrollado desde el 11 de Septiembre resultó inédito en nuestro país.

En particular, el gremio docente vivió en carne propia la dureza del régimen autoritario, que asesinó a más de 130 educadores en todo Chile; torturó y exoneró de sus lugares de trabajo a cientos de maestras y maestros; generó la Deuda Histórica, que es un daño material que afecta a miles de profesoras y profesores hasta el presente; suprimió la organización docente previa al Golpe de Estado -de carácter plural y extendida a todo el país-; terminó con la centenaria tradición de las Escuelas Normales, formadoras de generaciones de profesores; destruyó el sistema nacional de Educación Pública del país y provocó un retroceso de décadas en las condiciones de desarrollo de la profesión docente en Chile.

Esta somera revisión de antecedentes del régimen impuesto a la fuerza en el país desde 1973 llama a decir con toda la fuerza y la claridad posibles que sí fue una dictadura. Y, por tanto, la discusión democrática, el respeto a los Derechos Humanos y las miles de víctimas exigen rechazar los dichos que minimicen o relativicen la Dictadura chilena y sus crímenes, más aún si provienen de un candidato presidencial que aspira a ejercer la Primera Magistratura del país.

Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso como ciudadanos y educadores con la memoria, los Derechos Humanos y la Democracia.

COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE CHILE